

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Aura de Jesús Garzón de Zuleta
DEMANDADO	UGPP e IPSE
PROCEDENCIA	Juzgado 014 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 014 2020 00101 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 86 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente Ley 33 de 1973 y Ley 33 de 1985
DECISIÓN	No contaba el fallecido con tiempo de servicio para causar el derecho. Confirma absolución.

En la fecha, **diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por los magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Aura de Jesús Garzón de Zuleta**, contra la **Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP**, al que también fue vinculado por pasiva el **Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE-**. Radicado único nacional 05001 3105 **014 2020 00101** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado en acta **Nro.12** que se plasma a continuación:

Antecedentes

Pretende la demandante, por conducto de su apoderada, el reconocimiento de pensión de sobreviviente, en calidad de cónyuge supérstite, de **Joaquín Emilio Zuleta**, por parte de la **UGPP**, con pago de mesadas retroactivas anteriores a los 3 años de radicación de la demanda, indexación y costas procesales.

En sustento de ello se afirma que, la señora **Aura nació el 20 de diciembre de 1930**, el 12 de diciembre de 1955 contrajo matrimonio con Joaquín Emilio Zuleta, con quien compartió techo, lecho y mesa, procreando 4 hijos actualmente mayores de edad, unión que perduró hasta el **21 de diciembre de 1986**, cuando falleció el señor Joaquín por causas naturales. **Que Joaquín** laboró entre otras, al servicio del **Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico**, en la comisión: canalización y reembolso del Río Medellín, con vinculación el **27 de febrero de 1961, hasta el 18 de febrero de 1973, en el cargo de oficial de primera**, lapso en que estuvo afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social Seccional Antioquia, con un total de **600 semanas**. Que por liquidación de CAJANAL, las obligaciones de esta entidad pasaron a la UGPP, y por desconocimiento, a pesar de su precaria situación económica, la actora solo reclamó pensión de sobrevivientes a finales de 2017, anexando toda la documentación, prestación negada el 31 de enero de 2018, argumentándose que luego de revisados los diferentes aplicativos de la entidad, la página de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la documentación aportada,

se estableció que el fallecido no fue beneficiario de ningún reconocimiento pensional a cargo de las entidades recibidas por la UGPP, es decir, no ostentaba la calidad de pensionado; y además, no se allegó la documentación requerida para su otorgamiento, sin que la UGPP tenga la carga de la misma, acto contra el que se formuló recurso de apelación, resuelto de manera adversa. Seguidamente cita el soporte legal y jurisprudencial en que sustenta la reclamación.

En auto del **30 de junio de 2021, se admitió y ordenó dar trámite a la acción**, y se dispuso la integración por pasiva del Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, entidad que posteriormente pasó a ser el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL, luego transformado mediante Decreto 1140 de 1999 en el **Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE** – adscrito al Ministerio de Minas y Energía.

Debidamente notificadas, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, de los hechos tiene como cierta la fecha de nacimiento de la demandante, la solicitud de pensión de sobreviviente realizada por esta el 20 de septiembre de 2017, la respuesta negativa, la interposición de recurso de apelación y el resultado del mismo. Los demás supuestos no le constan. **Resistió** las pretensiones y formuló las **excepciones** de: inexistencia de la obligación de: reconocimiento de pensión de sobrevivientes con retroactividad, de pagar intereses moratorios y de indexación de las condenas; buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la genérica.

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas – IPSE-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos manifestó que no son ciertos o no le constan, explicando sobre el tercero, que: *si bien, la demandante hace una afirmación relacionada con la vinculación laboral del señor Joaquín Emilio Zuleta, identificado con C.C. 509.162, con el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, y el tiempo de duración de la misma, no se presenta con la demanda ningún soporte probatorio que dé cuenta de ello. Sin embargo, una vez consultado con la coordinación de Talento Humano y con el Archivo Central del IPSE, se encontraron planillas de jornales que permiten establecer que el señor Joaquín Emilio, prestó servicios al Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, en la modalidad de trabajo por jornales, entre el 9 de enero de 1967 y el 25 de febrero de 1968, por un total de 98 días, debidamente relacionados, precisando que: dada la fecha de los hechos, que data de más de 50 años, junto con la modificación y transformación de la Entidad en varias oportunidades, se pudo validar en las planillas de jornales de meses anteriores y posteriores a los indicados ... que el señor Joaquín Emilio Zuleta, no figuraba en los mismos,* adjuntando copias de las planillas de pago de jornales de los meses de marzo, junio y diciembre de 1961; enero, junio y diciembre de 1962; febrero, junio y noviembre de 1963; marzo y mayo de 1964; junio y diciembre de 1965; marzo, octubre y diciembre de 1966; julio de 1967; enero y marzo de 1968 y enero de 1968; e igualmente, planillas de liquidación de primas de navidad de los años 67 y 68, con evidencia que el señor Joaquín Emilio, para esa fecha no se encontraba vinculado a tal instituto. Formuló **como medios exceptivos los de:** falta de legitimación en la causa por pasiva, e inexistencia de la obligación de reconocimiento de derechos pensionales.

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, el 29 de marzo del año que corre, declarando probada la excepción de **inexistencia de la obligación de**

reconocimiento de pensión de sobrevivientes, propuesta por las demandadas, y en consecuencia, las absolvió de las pretensiones incoadas en su contra. En consideración a la edad de la solicitante, supera 90 años, se abstuvo de imponer condena en costas.

Argumentó el fallador, que la norma a observar para definir el derecho pensional reclamado, es la vigente para la fecha del deceso del señor Joaquín Emilio, esto es diciembre de 1986, correspondiendo entonces **a las Leyes 33 de 1973, 33 de 1985 y el Decreto 690 de 1974**, sin que este ostentara la calidad de pensionado, ni acredite el tiempo para generar tal derecho, pues solo obra en el plenario prueba del trabajo por jornal desempeñado para lo que hoy es el IPSE, entre el **09 de enero de 1967 y el 25 de febrero de 1968, por un total de 98 días**, aportándose por esta entidad planillas anteriores y posteriores a tales calendas en las que no aparece el nombre del fallecido, explicándose en los actos administrativos, inicialmente negando la pensión, luego decretando pruebas previas a decidir el recurso de apelación y el que desató este, que el fallecido, ***no se encontraba pensionado; y tampoco se acredita que se encontrara afiliado a través de sus cotizaciones para el sistema de seguridad social en pensiones***, por lo que ***no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes incoada***. Señalando que ***le corresponde a la interesada aportar los documentos probatorios necesarios para demostrar los hechos en que fundamenta su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 del C. G. P.***, habiéndose librado oficio a la OBP para obtener información frente al señor Joaquín, sin que el mismo se encontrara registrado ni en el RAIS, ni en el RPM y tampoco en ninguna otra entidad, luego, no estando demostrado el tiempo de servicios requerido para causar el derecho pensional post mortem, declaró configurado el medio exceptivo de ***inexistencia de la obligación***.

Inconforme con ello, **interpuso recurso de apelación la apoderada del demandante**, reiterando los sustentos legales y jurisprudenciales expuestos en el escrito de demanda, pues estima que son dos los argumentos de la UGPP para negar la pensión reclamada, el primero que el señor Joaquín no fue beneficiario de reconocimiento pensional, ***lo que en ningún momento se manifestó, él murió sin reclamar la pensión de vejez.*** Y de otro lado, se impone a la reclamante la carga de la prueba frente al tiempo laborado, cuando por disposición legal tal custodia está a cargo de la UGPP, citando aparte de sentencia **T-058 de 2017**, sin que se le pueda pedir a la señora Aura que desista del derecho adquirido e irrenunciable a la pensión de sobrevivientes, cuando la ley y la Constitución la facultan como cónyuge supérstite del señor Joaquín Emilio para reclamarla, amparándose la entidad en que no tiene en su base de datos información al respecto.

Agrega que la UGPP fundamenta su decisión en consideraciones inexactas, porque afirma que la documentación se presentó incompleta, sin que dentro de los cuatro meses para respuesta se hubiere hecho ningún requerimiento, adjuntando lo exigido en la página web, esto es: partida eclesiástica de bautismo, fotocopia del documento de identidad, registro civil de matrimonio, registro civil de defunción y declaración juramentada de convivencia, documentos todos allegados en copia autentica y el último en original. Finalmente, se acude al art. 167 del CGP, aduciendo que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que persiguen, pero esto es un fragmento descontextualizado de la norma, pues está en cabeza del juez distribuir esa carga, ordenando a la parte que se encuentre en situación más favorable aportar los elementos de convicción o evidencias para esclarecer los hechos controvertidos.

Por su parte el IPSE manifestó en la contestación que, dado el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, más de 50 años, y teniendo en cuenta las transformaciones de la entidad, se pudo verificar en planillas anteriores al 9 de enero de 1967 y posteriores a febrero de 1968, que Joaquín Emilio no figura en ellas, y allegó las copias para evidenciarlo, prueba que consiste en diferentes planillas del Instituto, sin abogar certeza del derecho en debate, toda vez que no se cuenta con verificación o inspección por parte del Juzgado que dé cuenta de la fuente o autenticidad de la información depositada en el archivo histórico, si hay secuencia de las referidas planillas, o si debido al transcurso del tiempo y modificaciones de la entidad faltan algunas o muchas que impidan reconstrucción de los hechos en litigio, por lo que no se pueden tener en cuenta, ya que no cumplen con los requisitos mínimos.

Para la profesional, al término del proceso queda un interrogatorio sin respuesta, si en los archivos del IPSE no reposa vinculación laboral anterior a 1967, ni posteriori a 25 de febrero de 1968, porque será que el señor Zuleta portaba y dejó entre sus objetos personales un carnet que lo acreditaba como trabajador oficial de primera en tal entidad desde el 1º de febrero de 1961, documento que cuenta con dos sellos que dan certeza de su autenticidad y con firmas del jefe inmediato y director.

Téngase en cuenta además que el disfrute del derecho a la vida en condiciones dignas es un presupuesto mínimo del Estado Social de Derecho, y en el caso concreto de la demandante se trata de una mujer de edad avanzada, con limitaciones físicas y en precaria situación económica, no cuenta con ingresos, renta o pensión, sobrevive de la ayuda de sus hijos, todos con otras obligaciones, lo que conlleva detrimento de su calidad de vida, pues la mayoría de veces no alcanza

a suplir sus necesidades primarias, lo que si haría con la pensión de sobrevivientes, que no reclamó por falta de asesoría, sin que se le pueda negar una vida digna en el ocaso de sus días.

Explica que el artículo 53 Superior establece la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, así como el derecho al mínimo vital, y los artículos 46 y 47 de la Ley 100 relacionan a quienes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes y el requisito para acceder a ella, **sin que en ninguno de sus apartes se incluya la presentación de historia laboral o colillas de pago**, máxime cuando se habla de un derecho adquirido desde hace 33 años, que por desconocimiento la demandante nunca reclamó, siendo esta sujeto de especial protección por su avanzada edad. Cita aparte de la Sentencia T 025 de 2015.

En conclusión, resulta contrario a derecho que una entidad del Estado como la UGPP, pretenda supeditar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a requisitos adicionales no establecidos legalmente, cuando está a su cargo la guarda de la historia de las bases de datos, y la beneficiaria no tiene ni tiempo, ni fuerzas, para tramitologías innecesarias, aportando carnet de Cajanal con fotografía, sellos y firma, que prueba la calidad de cotizante del fallecido, por lo que de existir incongruencia en la historia laboral es carga de la administradora de pensiones demostrar su ilegalidad o irregularidad, ya que los principios de buena fe y presunción de inocencia recaen en el pensionado. Sentencia T 058 de 2017.

De la etapa de alegaciones hizo uso la **apoderada judicial de la UGPP** insistiendo en que *la prestación de sobrevivientes, es la pensión a la que tienen derecho los miembros del núcleo familiar que cumpla con las exigencias establecidas*

en la ley, del pensionado o afiliado cotizante fallecido; para el caso particular, el señor JOAQUIN EIMLIO ZULETA no se encontraba pensionado; y tampoco se acredita que se encontrara afiliado a través de sus cotizaciones para el sistema de seguridad social en pensiones, por lo que es un error manifestar que el causante dejó causado el derecho, y ante el no surgimiento de pensión tampoco hay lugar a intereses moratorios, por lo que pide mantener la negativa a las súplicas de la demanda y declarar configuradas las excepciones propuestas.

El apoderado del **IPSE**, luego de explicar su naturaleza jurídica y normas que lo regulan, ratifica que no tiene asignadas funciones de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas, por lo que no existía necesidad de ser vinculado a este trámite al estar las pretensiones orientadas a ello. Sumado a ello no está demostrado tiempo de prestación de servicio por parte del fallecido, suficiente para causar el derecho pensional reclamado, reproduciendo cuadro incorporado al escrito de contestación de días laborados bajo la modalidad de jornal, resultando por tanto ajustados a derecho los argumentos del a quo para negar las pretensiones, careciendo de sustentos los de la parte apelante, por lo que pide mantener la decisión de primer grado.

La **apoderada de la demandante**, insiste en que es procedente el otorgamiento del derecho pensional reclamado, a cargo de la UGPP, ratificando los argumentos expuestos a lo largo de sus intervenciones en el trámite.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Ruega la demandante el reconocimiento por parte de la **UGPP**, de pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge **Joaquín Emilio Zuleta**, su inclusión en nómina y el pago de mesadas retroactivas indexadas y para ello allegó como soportes probatorios, entre otros:

Copia de cedula de ciudadanía, fecha de nacimiento **19 de diciembre de 1930**, partida de bautismo con nota de matrimonio canónico con Joaquín Emilio Zuleta el 12 de diciembre de 1955, acto inscrito en el registro civil; **carnet a nombre de Joaquín Emilio Zuleta**, expedido por el **Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico**, ingreso **febrero 27 de 1961**, y registro civil de defunción del señor Joaquín, **ocurrido el 22 de diciembre de 1986**, hecho con ocasión del cual radicó ante la UGPP solicitud de pensión de sobrevivientes, negada con Resolución RDP 000929 del 15 de enero de 2018, **porque:**

... revisados los diferentes aplicativos de la Entidad, la página de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la documentación aportada, se establece que el causante no fue beneficiario de ningún reconocimiento pensional a cargo de alguna de las Entidades recibidas por la UGPP, es decir, no ostentaba la calidad de Pensionado, así mismo, no fue aportada la documentación requerida para acceder al reconocimiento de una Pensión Post mortem o de una Pensión sobrevivientes por muerte de afiliado no pensionado. ... Que para dar trámite a la solicitud de reconocimiento y pago de una Pensión de Sobrevivientes, es necesario que la solicitante allegue en su totalidad los elementos de juicio que permitan tomar una decisión mediante acto administrativo, dicha carga probatoria está única y exclusivamente en cabeza del peticionario.

Acto contra el que se interpuso recurso de apelación, pidiendo su revocatoria, estableciéndose previo a su estudio, en la página Web de bonos pensionales, que el señor Zuleta Joaquín Emilio aparece con historia laboral del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL, por lo que en auto de pruebas la UGPP requirió, tanto a la solicitante como a la referida entidad, para que allegaran copia del *certificado de todo el*

tiempo de servicio prestado por ZULETA JOAQUIN EMILIO, ya identificado, expedidos en el formato que se encuentra registrado en la página web del Ministerio de Hacienda (Circular conjunta No. 13, de abril 18 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y Hacienda), estableciendo a que caja o fondo se realizaron los aportes a pensión, y finalmente, con Resolución RDP 018491 del 23 de mayo de 2018, se confirmó el acto atacado, indicándose:

Que teniendo en cuenta que la prestación de sobrevivientes, es la pensión a la que tienen derecho los miembros del núcleo familiar con cumpla con las exigencias establecidas en la ley, del pensionado o afiliado cotizante fallecido; para el caso en particular, el señor JOAQUIN EMILIO ZULETA no se encontraba pensionado; y tampoco se acredita que se encontrara afiliado a través de sus cotizaciones para el sistema de seguridad social en pensiones. Que teniendo en cuenta lo anterior, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia incoada.

En expediente administrativo el IPSE allegó las planillas con pagos de jornales por 98 días al señor Joaquín Emilio Zuleta, comprendidos entre los meses de enero de 1967 y febrero de 1968, y planillas anteriores y posteriores a tales calendas en que no figura su nombre.

En respuesta a oficio librado por el Juzgado de conocimiento con fecha 01 de julio de 2021, solicitando se informara *si existen bonos pensionales a favor de Joaquín Emilio Zuleta...*, indicando las entidades empleadoras y/o cajas que reportan el bono, su valor y la historia laboral válida para bono pensional si la hubiere, **se indicó por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público** que:

Efectuada la búsqueda correspondiente en el sistema de bonos pensionales de esta Oficina, el señor JOAQUIN EMILIO ZULETA,... NO FUE ENCONTRADO, tal como se evidencia en el Print de pantalla que se anexa con la presente contestación.

Adicionalmente se pudo verificar que respecto del señor JOAQUIN EMILIO ZULETA... "no se encontró reporte de afiliación al RAI", "No se encontró reporte de afiliación a COLPENIONES" y "no se encontró reporte de afiliación a OTRA ENTIDAD", tal como se evidencia en el Print de pantalla que se anexa a la presente contestación.

Finalmente se informa al Despacho que en relación con la cédula de ciudadanía No. 509162, no se encontró que se hubiere solicitado la emisión de bono pensional alguno.

Es del caso informar al Señor(a) Juez que, al NO ENCONTARSE AFILIADO el señor JOAQUIN EMILIO ZULETA (Q.E.P.D.), a NINGUNO DE LOS DOS (2) REGIMENES PENSIONALES ESTABLECIDOS POR LA LEY 100 DE 1993 (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad "RAIS" y Régimen de Prima Media Con Prestación Definida "RPM", DICHA CIRCUNSTANCIA IMPOSIBILIDA QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE Liquidar un "eventual" bono pensional a su favor, dado que el trámite de Liquidación, Emisión y Redención de este beneficio es una OBLIGACION que recae en la Administradora de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el beneficiario del mismo.

Pues bien. Tal como se explica en sentencia T-001 de 2020,

La pensión de sobrevivientes tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando se crearon reconocimientos a los sobrevivientes de los militares que fallecían al servicio de la naciente República. Fue así como se creó, por ejemplo, el Montepío Militar por Ley de 8 de octubre de 1821. También se concedieron reconocimientos a próceres, eventualmente sucedidos a sus viudas e hijas solteras, incluso a los nietos y bisnietos, al igual que a ciertos empleados civiles, como en algunos casos que fueron reconocidos por leyes expedidas en el siglo XX. Dichos tratamientos especiales se prolongaron a lo largo del siglo XX¹.

Quizá fue solo con la promulgación de las leyes 153 de 1896 (que creó el Montepío militar), 31 de 1904 (pensiones), 80 de 1916 (sucesores de oficiales que murieran en guerras), 102 de 1927 (pensión de sobrevivientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y funcionarios judiciales, de ferrocarriles, puertos, correos,

¹ "Génesis y evolución de la pensión de sobrevivientes. Análisis de la Sentencia SL1399-2018, Radicado 45779" Revista N° 208 Jul.-Ago. 2018. Legis. Oscar Andrés Blanco Rivera. Johana Bravo Sánchez. Blanco Consultores.

telégrafos y del Congreso), 6º 1945 y 90 de 1946, con las que se estableció la pensión de sobrevivencia en nuestro país².

Esta última estableció:

Artículo 59. La viuda, sea o no inválida, o el viudo inválido, gozará de una pensión vitalicia mensual, proporcional a la de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el asegurado o a la que le hubiera correspondido al realizarse el estado de invalidez en la época de su defunción, ...

Más adelante, en 1950, el nuevo Código Sustantivo del Trabajo señaló en su artículo 275 que:

1. Fallecido un trabajador jubilado, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años tendrán derecho a recibir la mitad de la respectiva pensión durante dos (2) años, contados desde la fecha del fallecimiento, cuando el trabajador haya adquirido el derecho dentro de las normas de este Código, lo esté disfrutando en el momento de la muerte, y siempre que aquellas personas no dispongan de medios suficientes para su congrua subsistencia.

Posteriormente, la Ley 33 de 1973 extendió el derecho a las viudas de forma vitalicia:

ARTÍCULO 10. Fallecido particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.

Y en cuanto a los requisitos que debían acreditarse por parte de la viuda, el Decreto 690 de 1974 indicó:

Artículo primero. Para reclamar la pensión de jubilación, invalidez o vejez a que se refiere el artículo 1º de la Ley 33 de 1973, la viuda deberá acreditar su condición de causahabiente con las partidas civiles o

² “Génesis y evolución de la pensión de sobrevivientes. Análisis de la Sentencia SL 1399-2018, Radicado 45779” Revista N° 208 Jul.-Ago. 2018. Legis. Oscar Andrés Blanco Rivera. Johana Bravo Sánchez. Blanco Consultores.

eclesiásticas de matrimonio, o con las pruebas, supletorias señaladas por la ley.

...

Parágrafo I. Para comprobar que no se ha perdido el derecho consagrado en el artículo 1º. de la Ley 33 de 1973, la viuda deberá acreditar sumariamente que en el momento del deceso del pensionado hacía vida en común con éste, o que se encontraba en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado aquél el hogar sin justa causa o por haberle impedido su acercamiento o compañía.

...

En suma, la pensión de sobreviviente, sustitución pensional, o pensión post mortem, desde sus orígenes fue creada para proteger a quienes dependían de aquel que recibía una mesada, ya fuera por vejez o invalidez, la cual fue inicialmente por un determinado periodo para las viudas o cónyuges supérstites, pero que a partir de la Ley 33 de 1973 se otorga de manera vitalicia a estas e incluso a compañeros (as) permanentes.

Y para la estructuración del derecho a la pensión ordinaria, el Decreto 1849 de 1969 que reglamentó el 3135 de 1968, que integró la seguridad social entre el sector público y el privado, y reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, definió:

Artículo 68. *Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en el artículo 1o. de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación al cumplir cincuenta y cinco años de edad, si es varón, o cincuenta (50) años de edad, si es mujer. (Modificado por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988).*

ARTÍCULO 70.- Empleados con diez y ocho (18) años de servicios. *Los empleados oficiales en servicio activo que el día veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968), fecha de vigencia del Decreto Legislativo 3135 del año citado, hubieren cumplido diez y ocho (18) años de servicios, continua o discontinuamente, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir los veinte (20) años de servicios requeridos y cincuenta (50) años de edad, cualquiera sea su sexo. (Lo*

subrayado declarado nulo, sentencia del 21 de septiembre de 1971 del Honorable Consejo de Estado).

ARTÍCULO 71.- Empleados retirados con veinte (20) años de servicio.

1. Los exempleados oficiales que estaban retirados del servicio el día 26 de diciembre de 1968, con un tiempo de servicios no menor de veinte (20) años, laborados continua o discontinuamente, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir los cincuenta (50) años de edad, sean varones o mujeres.

2. Dicha pensión se reconocerá y pagará con sujeción a las normas legales que regulaban la materia al tiempo del retiro definitivo del servicio oficial.

ARTÍCULO 72.- Acumulación del tiempo de servicios. *Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de jubilación, En este caso, el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas entidades, establecimientos, empresas o sociedades de economía mixta.*

Y la Ley 33 de 1985, reza:

ARTÍCULO 1º.- *El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.*

Se explica en el escrito de demanda y al sustentar la alzada que el señor Joaquín falleció sin reclamar pensión de vejez y tampoco disfrutaba de pensión de invalidez, ni se demostró ninguna condición para ello, luego, al ocurrir su muerte en diciembre de 1986, las normas a observar son las antes referidas, **debiendo el trabajador demostrar un tiempo de servicio equivalente a 20 años, para causar el derecho pensional para sí, o post mortem como se pide**, sin que obre prueba del tiempo servido al IPSE diferente a la que certifica esta entidad, esto es 98 días – **jornales-**, y a pesar del despliegue investigativo de la UGPP y del juzgado de primer grado, no fue posible hallar registro alguno de cotizaciones del

señor Zuleta a ninguna entidad, o tiempos que den lugar a expedición de bono pensional, sin que del carnet expedido por el **Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico**, en el que se registra fecha de ingreso: **febrero 27 de 1961, se infiera el tiempo de labores que se aduce en los hechos, esto es desde tal calenda hasta el 18 de febrero de 1973**, pues no obra medio de convicción alguno de las labores continuas del demandante durante tal lapso y por el contrario, lo que se evidencia, para los años 1967 y 1968 es un trabajo por jornales, **ello conforme a la prueba allegada, no tachada en la oportunidad legal**, sin que existan razones para restarle mérito como se aduce al sustentar la alzada.

Y es que si bien es cierto que las entidades de seguridad social tienen la obligación de guarda y custodia de la historia laboral, y por tal razón la jurisprudencia constitucional y especializada ha considerado que:

... por regla general la información que se consigne en los pronunciamientos de resúmenes de semanas cotizadas vincula a dichas entidades en atención al principio de buena fe que debe irradiar a sus actuaciones y el respeto de las expectativas legítimas que ello puede generar en los afiliados (CC T-202-2012)» (CSJ SL5172-2020 y SL1116-2022).

También lo es, que cuando se presentan inconsistencias en el contenido de las certificaciones o historial, ***es necesario acreditar la existencia del vínculo laboral durante el interregno que se pretende convalidar, dado que para los trabajadores dependientes afiliados al sistema de pensiones las cotizaciones se causan o se generan con la efectiva prestación del servicio, ello con independencia que se presente mora del empleador en el pago de las mismas*** (CSJ SL 34256, 10 feb. 2009, CSJ SL9808-2015 y CSJ SL13276-2015SL1691-2019, CSJ SL2000-2021, CSJ1116-2022).

Y cuando existe falta de afiliación, la jurisprudencia ha dicho que no es posible atribuirle responsabilidad a la administradora en relación con el

cobro de los aportes, en tanto desconoce el hecho generador de la cotización, al ser la entidad ajena a la existencia de la relación de trabajo, debiéndose traer a juicio los elementos que la acrediten, (al respecto se puede consultar las sentencias CSJ SL3609-2021, CSJ SL3845-2021, CSJ SL1506-2021, CSJ SL5058-2020).

Luego, por no estar debidamente acreditado el tiempo exigido para dejar causada la pensión post mortem, ya que solo se demuestran labores por **jornales del fallecido con el hoy IPSE por un lapso de 98 días**, sin que se alcancen los **20 años**, ni aun aceptando el argumento de la parte actora, esto es, prestación de servicio entre el 27 de febrero de 1961 y el 18 de febrero de 1973, habrá de **confirmarse** la sentencia revisada.

Las costas en esta instancia a cargo de la demandante, a quien se desata adversamente el recurso, artículo 365 numerales 1 y 6 del C. G. del P.. Las agencias en derecho a favor de las accionadas se fijan en la suma de \$1.160.000,00 (Acuerdo PSAA16-10554 de 2016), distribuidos en igual proporción.


En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Aura de Jesús Garzón de Zuleta**, contra la **Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP**, al que también fue vinculado por pasiva el **Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE**.

Las costas en esta instancia a cargo de la demandante, a quien se desata adversamente el recurso, artículo 365 numerales 1 y 6 del C. G. del P..

Las agencias en derecho a favor de las accionadas se fijan en la suma de \$1.160.000,00 (Acuerdo PSAA16-10554 de 2016), distribuidos en igual proporción.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO